

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
M.P. FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
E. S. D.

ASUNTO: PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARIA EDELMIRA QUINTERO QUINTERO Y OTROS
DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Y OTROS
RADICACIÓN: 76001-23-31-000-2004-05560-00
ACCIÓN ORIGINARIA: REPARACIÓN DIRECTA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en causa propia, en mi condición de representante legal de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900701533-7, legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Cali, lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal adjunto, expedida por la Cámara de Comercio de Cali; persona jurídica que actúa en calidad de cesionaria de todos los derechos de crédito y económicos, tanto presente como futuros, reconocidos en la sentencia de segunda instancia de calenda 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 306 y 307 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P.), en concordancia con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), dentro del término oportuno, formulo **DEMANDA EJECUTIVA** a continuación del proceso de reparación directa de la referencia formulado en contra del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**, entidad de derecho público, identificada con NIT. 800.215.807-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por su Directora Mercedes Elena Gómez Villamarín y/o quien haga sus veces, con fundamento en los hechos, pretensiones y fundamentos jurídicos que a continuación expone:

CAPITULO I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

PRIMERO: El 2 de febrero del 2005, María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis, Luz Nancy Segura en su propio nombre y en el de los menores Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura; Humberto Salazar Cabal, en nombre propio y de su hijo menor de edad Juan David Salazar Segura presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Transporte, del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, del Instituto Nacional de Concesiones-Inco-, y del Departamento del Valle del Cauca, pretendiendo lo siguiente:

- 1) *Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías- Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca, de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto, CARLOS ANDRÉS SEGURA QUINTERO y por las secuelas de ese hecho trágico acaecido en la vereda La Garza del municipio de Dagua, en la vía que conduce a Buenaventura.*
- 2) *Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías- Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca en su condición de entes administrativa y patrimonialmente responsables, a indemnizar a los demandantes por todos los perjuicios sufridos.*
- 3) *Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones -Inco- y al Departamento del Valle del Cauca a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales infligidos a cada uno de ellos, el equivalente en moneda legal a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, liquidando esta suma de acuerdo al monto del salario mínimo legal vigente en la fecha que se pague según la sentencia o en subsidio en la fecha de la muerte del Joven Carlos Andrés Segura Quintero, conforme a la regulación legal que lo fije o en su defecto según la certificación que el Ministerio de Trabajo*

y Seguridad Social para la fecha en que se cancele según la sentencia, de acuerdo al siguiente detalle:

María Edelmira Quintero Quintero - abuela - 200SMLMV
Luz Nancy Segura Quintero - madre - 200SMLMV
Humberto Salazar Cabal - padre de crianza - 200SMLMV
José Leonardo Celis Segura - hermano - 200SMLMV
Claudia Alejandra Mosquera - hermano - 200SMLMV
Juan David Salazar Segura - hermano - 200SMLMV

4) De la misma manera condénese a los demandados a la Nación Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías-Invias-, al Instituto Nacional de Concesiones --Inco- y al Departamento del Valle del Cauca al pago de todos los perjuicios materiales ocasionados con motivo de ese hecho, de acuerdo a lo que se pruebe en el proceso, así:

A. Para la señora Maria Edelmira Quintero Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su nieto, Carlos Andrés Segura Quintero, quien en vida se los proporcionaba para la atención de sus gastos y necesidades personales y que ascendían a la para la época del deceso a \$200.000 mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del Índice de precios al consumidor (I.P.C.) certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2.003, hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

B. Para la señora Luz Nancy Segura Quintero la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas para estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hijo Carlos Andrés Segura Quintero, quien se se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época dl deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del Índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

Igualmente la Indemnización en cuestión debe abarcar tanto el lucro cesante por el periodo vencido o consolidado, que comprende desde el luctuoso hecho el 16 de octubre de 2003 hasta el día de la sentencia en firme, y el periodo futuro, que parte del respectivo fallo ejecutoriado hasta la fecha probable de supervivencia de la demandante, según las aludidas tablas.

D. Para la niña Claudia Alejandra Mosquera Segura, quien está representada por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero, la suma que resulte de aplicar las correspondientes formules matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella experimenta y de los que seguirá privada hasta el final de sus días por la

muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, la de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende ha de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del Índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

E. Para el niño Juan David Salazar Segura, quien está representado por su señora madre Luz Nancy Segura Quintero y por su padre Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras, ordinariamente utilizadas en estos casos, para el cálculo del daño material proveniente del lucro cesante, originada en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) y de lo que seguirá privada hasta el final de sus días por la muerte de su hermano, Carlos Andrés Segura Quintero, quien se los proporcionaba tomando en cuenta el valor del dinero líquido en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendía para la época del deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago del denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del Índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pendiente.

F. Para el señor Humberto Salazar Cabal la suma que resulte de aplicar las correspondientes fórmulas matemáticas y financieras ordinariamente utilizadas en estos casos, para el daño material proveniente del lucro cesante, originado en la pérdida de los ingresos monetarios que ella (sic) experimenta y de los que se seguirá privada (sic) hasta el final de sus días por la muerte de su hijo de crianza Carlos Andrés Segura Quintero quien se los proporcionaba, tomando en cuenta el valor del dinero líquido que en forma regular y periódica le suministraba para la atención de sus gastos y necesidades de orden personal propias, de su señora madre, de su padre de crianza y la de sus hermanos y que ascendían para la época de su deceso a \$1.300.000 pesos mensuales.

Para el efecto, la condena del pago denominado lucro cesante ha de tenerse en consideración que ella debe tener efectivamente un contenido reparatorio, por ende han de aplicarse las fórmulas fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por supuesto la actualización o indexación de la respectiva indemnización, observando las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), certificados por el Dane desde el día de la trágica muerte del joven Carlos Andrés Segura Quintero, 16 de octubre de 2003 hasta la fecha en que se haga el pago según la sentencia pertinente.

4. De manera subsidiaria pido la estimación del lucro cesante tanto para la madre en su nombre propio y en el de sus menores hijos, como para la abuela, padre de crianza y hermanos, se haga con base en el salario mínimo legal vigente en el año 2003 cuando el joven Carlos Andrés Segura Quintero falleció, caso en el cual han de aplicarse las fórmulas matemáticas y financieras pertinentes para establecer el lucro cesante pasado y el futuro: el primero desde la fecha del deceso hasta la respectiva sentencia y el segundo desde la emisión de la misma hasta la fecha estimada probable de vida de cada uno de los reclamantes y la fecha en que la menor alcance la mayoría de edad.

5. Ordenar que el fallo se cumpla en los términos del Código Contencioso Administrativo arts. 176 y 177.”

SEGUNDO: El conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle-M.P. Fernando Augusto García Muñoz, bajo radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-00, quien, mediante Auto del 13 de mayo de 2005, dispuso admitir la demanda e imprimirle el trámite correspondiente.

TERCERO: Surtido todo el trámite procesal, el 14 de septiembre de 2010, el M.P. Dr. Fernando Augusto García Muñoz, profirió fallo de primera instancia, disponiendo: **“NIÉGUESE las pretensiones de la demanda”**. (Negrita corresponde al texto original).

CUARTO: El 12 de octubre del 2012, dentro del término oportuno, en representación de la parte demandante formulé y sustenté el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. El recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Valle-M.P. Fernando Augusto García Muñoz y admitido por el Consejo de Estado.

QUINTO: El 30 de agosto de 2018, el Consejo de Estado profirió fallo de segunda instancia, resolviendo, lo siguiente:

“REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de septiembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: SE DECLARA PROBADA la excepción de "Falta de legitimación en la causa por pasiva" en favor de la Nación-Ministerio de Transporte, del departamento del Valle del Cauca y del Instituto Nacional de Concesiones-Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura.

SEGUNDO: SE DECLARA al Instituto Nacional de Vías -Invias- responsable de los daños antijurídicos ocasionados por la muerte de la Joven Carlos Andrés Segura Quintero, ocurrida el 16 de octubre de 2003 en la carretera que de Cali conduce a Buenaventura.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA al Instituto Nacional de Vías -Invias- a pagar las siguientes Indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

A favor de Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

A favor de María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura, Claudia Alejandra Mosquera Segura y Juan David Salazar Segura la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

CUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas

SEXTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. SE CONDENA a la Compañía Central de Seguros S.A. a pagar al Instituto Nacional de Vías el valor que esta pague efectivamente con ocasión de la presente condena, hasta el límite del valor asegurado, considerando el límite del valor determinado en la póliza de seguros No. 120100000160 expedida por la referida compañía.

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas

a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.” (Negrita adrede).

SEXTO: La decisión proferida por el Honorable Consejo de Estado, fue notificada por edicto el 04 de octubre de 2018, conforme a lo previsto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En el señalado edicto se fijó como término de ejecutoria el día 11 de octubre de 2018.

SÉPTIMO: El 2 de julio del año 2019, actuando en nombre y representación de los demandantes (hoy parte cedente), presenté ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la correspondiente cuenta de cobro y/o solicitud de pago de la obligación contenida en la referida sentencia más los respectivos intereses, de conformidad con el inciso segundo del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. A esta cuenta de cobro le fue asignado como número de radicado interno 52103 por parte del INVIAS.

Se aclara que para ese momento el suscrito desconocía que el menor Juan David Salazar Segura había fallecido, motivo por el cual, dicha cuenta de cobro y/o solicitud de pago también se presentó en su nombre.

OCTAVO: El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante oficio OAJ 32497 de fecha 24 de junio de 2021, dio respuesta a la cuenta de cobro y/o solicitud de pago mencionada en el hecho anterior, identificada con radicado interno 52103, en los siguientes términos:

“Respetado doctor Herrera Ávila,

En atención a solicitud de pago de sentencia, proferida en el proceso de la referencia, me permito indicar que una vez revisados la documentación que soporta su requerimiento, se requiere que se aporten los siguientes documentos, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015, el cual regula el pago de sentencias y conciliaciones a cargo de las entidades públicas:

-Solicitud de pago por escrito, dirigida a INVIAS, para que se dé cumplimiento sentencia, laudo arbitral o conciliación, en la que el beneficiario o su apoderado manifieste bajo la gravedad del juramento que no ha presentado solicitud de pago por el mismo concepto, ni ha intentado el cobro ejecutivo (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).

-El poder que se hubiera otorgado, el cual debe reunir los requisitos de ley, incluir explícitamente la facultad de recibir el dinero y estar expresamente dirigido al INVIAS (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).

-Los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios y sus apoderados. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).

-Certificación bancaria, expedida por la entidad financiera, donde se indique el número y tipo de cuenta del apoderado y la de los beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pago se les efectúe directamente. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1.).

-Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar la consignación. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. (Decreto 2469 de 2015, artículo 2.8.6.5.1).

-Copia del Registro Único Tributario -RUT- de los beneficiarios del crédito judicial y cédula de ciudadanía y del apoderado. Teniendo en cuenta que el apoderado no remitió el poder con la facultad para recibir y cobrar dirigido al Invias. Decreto 2674 de 2012 y Manual de SIIF, Resolución DIAN 228 de 21 de octubre de 2013).

-Si el beneficiario de la sentencia o conciliación es menor de edad, debe solicitarse a través de su representante, o apoderado por el constituido, para lo cual deberá aportar el registro civil de nacimiento del menor, en donde se constate tal calidad. Si en el transcurso del

proceso judicial o del trámite de la solicitud de pago, el beneficiario cumple la mayoría de edad, deberá aportarse la ratificación del poder existente, o nuevo poder.

Hasta tanto no se allegue la documentación requerida, su solicitud no puede cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.

Quedamos atentos al envío de la documentación y a resolver cualquier duda acerca del trámite de pago.”

NOVENO: Con posterioridad a la presentación de la cuenta de cobro y a la comunicación del oficio OAJ 32497 del 24 de junio de 2021, el suscrito fue informado del fallecimiento de Juan David Salazar Segura (Q.E.P.D.), ocurrido el 12 de septiembre de 2008 a sus 11 años, quien era uno de los beneficiarios de las indemnizaciones dispuestas en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 30 de agosto de 2018 en el proceso de reparación directa **2004-05560**. Dicho derecho de crédito en contra del INVIAS le fue adjudicado a los herederos de aquél, sus dos progenitores, tal como se acredita en la escritura pública de liquidación de la respectiva sucesión, que se aporta al presente escrito como prueba documental.

DÉCIMO: Los herederos de Juan David Salazar Segura (QEPD), señores Luz Nancy Segura Quintero y Humberto Salazar Cabal, realizaron la liquidación de la sucesión mediante trámite que culminó con el otorgamiento de la Escritura Pública No.3183 del 28 de septiembre de 2021, corrida en la Notaría 5 del Círculo de Cali, en la cual se adjudicó el derecho de crédito referido, consistente en el cien por ciento (100%) de la indemnización a la que fue condenado el INVIAS, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia que por esta vía judicial se pretende cobrar.

UNDÉCIMO: Los señores Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis y Claudia Alejandra Mosquera Segura, todos mayores de edad, le confirieron poder especial, amplio y suficiente a la señora Luz Nancy Segura Quintero, para que en su nombre y representación celebrara con la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, contrato de cesión de los derechos de crédito y económicos reconocidos en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 30 de agosto de 2018 en el proceso de reparación directa **2004-05560** y los que de ella se deriven, incluidos los intereses que se generen y que se llegaren a causar, tal como se desprende del documento poder que se aporta con el presente escrito.

DUODÉCIMO: La señora Luz Nancy Segura Quintero, actuando en su propio nombre y en representación de los señores Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera Segura, cedió sus derechos de crédito y los de aquellos reconocidos en la comentada sentencia y los que de ella se deriven, incluidos los intereses que se generen a la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito. Lo anterior se puede constatar de la lectura del contrato de cesión de derechos suscrito entre la parte cedente (Luz Nancy Segura Quintero, quien actuó en su nombre y en representación de los demás beneficiarios) y la parte cesionaria que adjunto al presente.

DECIMOTERCERO: El derecho a recibir la indemnización contenida en la sentencia descrita en el hecho quinto de la presente acción ejecutiva, más los intereses que se han causado y los que se llegaren a causar hasta la fecha de pago efectivo, ya no se encuentra en cabeza del grupo familiar que fungió como parte demandante (Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera) en el proceso de reparación directa **2004-05560**, sino de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, en virtud del contrato de cesión de derechos de crédito y económicos celebrado el 23 de diciembre de 2021 ante la presencia de un notario.

DECIMOCUARTO: El 13 de junio de 2023, presenté ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), un memorial de complementación a la cuenta de cobro y/o solicitud de pago radicada el 02 de julio de 2019 bajo el No. 52103, a través del cual puse en conocimiento de la entidad el contrato e cesión tantas veces mencionado. En esta oportunidad actué como representante legal de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, cesionaria de los derechos de crédito y

económicos reconocidos en la sentencia de segunda instancia del 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa **2004-05560**. Lo anterior, con el propósito de que el pago de la indemnización a que fue condenado el INVIAS, más los intereses causados, se efectue en favor de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**,

DECIMOQUINTO: El INVIAS mediante oficio SDJ-48689 con fecha del 25 de agosto del 2023 solicito los datos de contacto de los beneficiarios iniciales de la sentencia señalada sin hacer mención alguna frnete a la adquisición de la calidad de beneficiaria de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**

DECIMOSEXTO: El 7 de septiembre del 2023 presenté ante el INVIAS, memorial de contestación al oficio SDJ-48689, en dicho memorial aporté todos los datos de contacto establecidos en el artículo 2.8.6.5.1 del decreto 2469 del 2015, tanto de los beneficiarios iniciales de la sentencia antes mencionada asi como de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**; lo anterior reiterando que esta última es actualmente la única beneficiaria del crédito reconocido en la sentencia citada.

DECIMOSÉPTIMO: Pese a que el suscrito acreditó ante el INVIAS todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 2469 de 2015, en armonía con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), para que dicha entidad procediera a asignar turno de pago a la cuenta de cobro presentada, a la fecha, esto no ha ocurrido.

En el oficio de respuesta SDJ 48689 de 17 de agosto de 2023, se indica expresamente lo siguiente:

“Asunto: Respuesta a Entrada No. 57929 con Fecha 13/06/2023

Muy comedidamente me refiero a su solicitud con radicado No. 57929 del 13 de julio de 2023, a través de la cual allega complementación a la solicitud de cumplimiento y pago de sentencia a favor de María Edelmira Quintero Quintero y otros, con Radicación: 76001-23-31-000-2004-05560-01 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos consagrados en el Decreto 2469 de 2015 para el crédito judicial contenido en el Expediente a nombre de MARIA EDELMIRA QUINTERO Y OTROS, se requiere que haga llegar a esta dependencia, copia de los documentos de identidad, teléfono, correo electrónico y dirección de domicilio de los beneficiarios de la misma.

En consecuencia, una vez contemos con todos los documentos y con el fin de dar aplicación al artículo 15 de la Ley 962 de 2005, se procederá a asignar turno de pago, atendiendo la fecha de cumplimiento de los requisitos.”

La anterior respuesta demuestra que el INVIAS se niega a reconocer que la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, de la cual soy representante legal, es la actual beneficiaria de los derechos de crédito contenidos en la sentencia de segunda instancia del 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa **2004-05560** (41173), pese a que, desde el 13 de julio de 2023, mediante memorial con asunto: *“Complementación cuenta de cobro, solicitud de cumplimiento y pago de sentencia (Art. 192 de la Ley 1437 de 2011”*, los notifiqué de manera formal, acerca del contrato de cesión de derechos de crédito celebrado con la demandante Luz Nancy Segura el 23 de diciembre de 2021, quien actuó en su nombre y en representación de los demás demandantes.

DECIMOCTAVO: La obligación contenida en la sentencia de segunda instancia del 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa distinguido con el radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 (41173) es **clara, expresa y actualmente exigible**, como se sintetiza:

OBLIGACIÓN CLARA: La entidad condenada (INVIAS) fue obligada a pagar la suma de

cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia (11 de octubre de 2018), los cuales liquidados conforme al salario mínimo legal mensual previsto para el año 2018, nos arroja la cifra de **TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$312.496.800)**.

OBLIGACIÓN EXPRESA: La obligación se encuentra expresamente contenida en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, la cual, presta mérito ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 305, 306 y siguientes del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

OBLIGACIÓN ACTUALMENTE EXIGIBLE: La obligación es actualmente exigible, tomando en consideración que ya han transcurrido más de los diez (10) meses previstos en el inciso segundo del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), desde la fecha presentación de la cuenta de cobro reclamando el pago vía administrativa (02 de julio de 2019), a la fecha de radicación de la presente solicitud de cobro vía judicial. Aunado a ello, no ha operado el fenómeno de la prescripción y/o caducidad, conforme a las reglas previstas en el artículo 164, numeral 2, literal k) de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en armonía con el inciso segundo del artículo 192 ibídem.”.

DECIMONOVENO: El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) no ha efectuado ningún pago por concepto de la obligación contenida en la sentencia de segunda instancia de calenda 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa distinguido con el radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 (41173), razón por la cual, resulta jurídicamente procedente que se libre mandamiento de pago en su contra, junto con los intereses moratorios causados y los que se llegaren a causar hasta que se produzca el efectivo pago.

Teniendo como fundamento los hechos anteriormente esbozados, formulo las siguientes:

CAPÍTULO II. PRETENSIONES

PRIMERA: Sírvasse **LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por la vía ejecutiva en favor de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, y en contra del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**, por la suma de **TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$312.496.800)**; obligación contenida en la sentencia de segunda instancia de calenda 30 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del expediente de reparación directa distinguido con el radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 (41173).

SEGUNDA: Sírvasse **LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por la vía ejecutiva en favor de la sociedad **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.701.533-7, representada legalmente por el suscrito, **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, y en contra del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**, por los intereses moratorios causados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia antes referida (11 de octubre de 2018) hasta la fecha efectiva de pago, conforme a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), teniendo en cuenta las variaciones certificadas mes a mes por la Superintendencia Financiera.

TERCERA: En el evento de persistir el incumplimiento de pago del crédito judicial objeto de este proceso, sírvasse **IMPONER** las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que hubiera lugar en contra de la Representante Legal del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** y/o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO

Imprímasele el procedimiento previsto en el capítulo II “*ejecución de las providencias judiciales*” del Código General del Proceso (artículos 305, 306 y siguientes), en armonía con lo previsto en el artículo 104, numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

CAPÍTULO IV. COMPETENCIA

La competencia recae en su despacho, por haber conocido en primera instancia el proceso de reparación directa que dio origen a la sentencia que por esta vía judicial se reclama.¹

CAPÍTULO V. PRUEBAS

Como evidencia de lo aquí expuesto pido sean tenidos en cuenta los siguientes elementos:

- Sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con fecha del 14 de septiembre del año 2010 en la cual se negó las pretensiones de la demanda interpuesta el 2 de febrero del 2005.
- Sentencia del Consejo de Estado con fecha del 30 de agosto del año 2018 por medio del cual se revocó lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de septiembre del año 2010 y se condenó al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** a pagar las sumas solicitadas en la demanda.
- Edicto por medio del cual se notificó la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 30 de agosto del año 2018 el cual tiene por fecha el 4 de octubre del 2018 y fue desfijado el 11 de octubre del mismo año.
- Contrato de cesión de derechos firmado entre **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.** en calidad adquirente y los señores Luz Nancy Segura Quintero, Humberto Salazar Cabal, María Edelmira Quintero, José Leonardo Celis Segura y Claudia Alejandra Mosquera quienes, tal como consta en el texto del señalado contrato, ceden los derechos que les fueron reconocidos en la sentencia del Consejo de Estado con radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 a la sociedad antes señalada de forma tal que queda acreditada plenamente la calidad de beneficiaria de esta última.
- Cuenta de Cobro presentada ante el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** la cual figura con numero de radicado 52103 del 2 de julio del año 2019 tal como consta en la esquina superior derecha de la primera página del documento.
- Oficio OAJ 32497 del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** con fecha del 24 de junio del año 2021 por medio del cual esta entidad requiere documentación adicional a la presentada en la cuenta de cobro y que presuntamente se encuentra contemplada en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015.
- Escritura Publica No.3183 del 28 de septiembre del 2021 Por medio de la cual se realiza la sucesión del causante **JUAN DAVID SALAZAR SEGURA** en favor de **HUMBERTO SALAZAR CABAL** y **LUZ NANCY SEGURA QUINTERO**, en dicha sucesión se incluyeron los derechos reconocidos en favor del causante en la sentencia Consejo de Estado con radicado 76001-23-31-000-**2004-05560**-01.
- Memorial de Complementación a la Cuenta de Cobro en el cual figura con numero de radicado 52103 del 13 de junio del año 2023; mediante este memorial se dio respuesta al oficio OAJ 32497 del 24 de junio del año 2021 y se aporta la información requerida en este mismo oficio.
- Constancia de radicación mediante correo electrónico del Memorial de Complementación a la Cuenta de Cobro con numero de radicado 52103 del 13 de junio del año 2023 en la cual consta que efectivamente se radico el señalado memorial y los demás documentos enviados.
- Oficio SDJ-48689 del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** con fecha del 17 de agosto del año 2023 por medio del cual esta entidad solicito la remisión de los datos de contacto de

¹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, providencia del 25 de Julio de 2017, Radicación 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), Actor: José Arístides Pérez Bautista.

los beneficiarios originales de la sentencia 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 del Consejo de Estado basándose en lo establecido en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015.

- Memorial por medio del cual se dio respuesta al oficio SDJ-48689 del 17 de agosto del año 2023, en este se señalaron de forma individual cada uno de los beneficiarios originales de la sentencia 76001-23-31-000-**2004-05560**-01 del Consejo de Estado y se aportaron todos los datos de contacto de estos; igualmente se volvió a señalar que debido al contrato de cesión firmado entre estos y **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.** esta sociedad es la única deficitaria del crédito reconocido en la citada sentencia.
- Constancia de radicación mediante correo electrónico del memorial de contestación al oficio SDJ-48689 del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** en la cual consta que efectivamente se presentó respuesta a los requerimientos realizados por el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**.

CAPÍTULO VI. ANEXOS

- Las pruebas relacionadas en el acápite inmediatamente anterior.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de **G. HERRERA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.A.S.**
- Mi Cedula de Ciudadanía
- Mi Tarjeta Profesional.

CAPÍTULO VII. NOTIFICACIONES

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)** podrá ser notificado en la dirección electrónica: njudiciales@invias.gov.co y de forma física en la dirección Cl. 25g #73b-90, Bogotá.

El suscrito y mi representada en la secretaria de su despacho, en la Avenida 6ABis No.35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali y en el correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.